**PROYECTO DE LEY NO. \_\_\_\_\_ DE 2022 CÁMARA**

Por medio de la cual se dictan normas para la formalización de bienes inmuebles rurales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

**Artículo 1°. Objeto de la ley**. La presente ley tiene por objeto la formalización de bienes inmuebles fiscales titulables y/o privados ocupados y/o en posesión en los términos del artículo 762 y s.s. del Código Civil.

**Artículo 2°. Definiciones**. Para efecto de lo dispuesto en la presente ley, se adoptan las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 2044 del 2020 y las del Código Civil en lo pertinente.

**Artículo 3°. Competencia**.- Serán competentes para adelantar los procesos de formalización y saneamiento de la propiedad inmobiliaria las entidades territoriales titulares del derecho real de dominio de los respectivos bienes inmuebles rurales.

**Artículo 4°. Cesión de bienes fiscales para adelantar programas de formalización**. Las entidades de derecho público en todos los órdenes y niveles podrán ceder a título gratuito a las entidades territoriales, los bienes inmuebles rurales y/o fiscales de su propiedad que no requieran para el ejercicio de sus funciones, con el fin de adelantar programas de formalización y saneamiento de asentamientos humanos establecidos en ellos.

**Parágrafo 1**. Las personas de derecho privado podrán ceder de manera gratuita bienes inmuebles urbanos y/o rurales de su propiedad, sin sujeción a la Unidad Agrícola Familiar, con el fin de realizar la legalización y saneamiento de asentamientos humanos ubicados en ellos.

**Parágrafo 2**. La formalización y saneamiento de la propiedad de asentamientos Humanos de que trata esta ley, se aplicará siempre y cuando se hayan constituido A instancias de la entidad pública y/o se cumplan los términos del artículo 2518 y s.s. del Código Civil.

**Parágrafo 3.** La formalización y saneamiento de asentamientos humanos rurales Se aplicará por única vez en los términos de la presente ley. El ocupante deberá demostrar la ocupación del predio de manera ininterrumpida por un término de Diez años (10) contados a partir del inicio de la actuación administrativa por parte De la entidad territorial.

Si el ocupante ostenta justo título, el término de ocupación podrá ser de cinco (5) años contados a partir del inicio de la actuación administrativa. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en el término de seis (6) meses contados a partir De la promulgación de la presente Ley.

**Artículo 5°. División material de predios fiscales sujetos a programas de formalización**. La división material de los predios fiscales de mayor extensión donde se encuentren asentamientos humanos, se realizará mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad territorial respectiva, el cual no requiere licencia de subdivisión ni protocolización mediante escritura pública. Realizada la inscripción del acto administrativo de división material y creados los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, se realizará la adjudicación mediante cesión a título gratuito a cada uno de los hogares que los ocupan, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo 3 del artículo 4 de la presente Ley.

El acto administrativo de cesión a título gratuito deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 2044 de 2020 y sobre el mismo se constituirá patrimonio de familia inembargable. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en el término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente Ley.

**Artículo 6°. División material de predios privados sujetos a programas de formalización**. La división material de predios privados de mayor extensión donde se encuentren asentamientos humanos, cuya propiedad se encuentre el común y proindiviso, podrá realizarse mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad territorial respectiva, el cual no requiere protocolizarse mediante escritura pública. En el mismo acto administrativo de división material, se ordenará la inscripción de los comuneros en los respectivos folios de matrícula según su porcentaje de participación en la comunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en el término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente Ley.

**Artículo 7°. Licenciamiento para división material de predios rurales**. La división material de bienes inmuebles rurales sólo requerirá de la licencia urbanística expedida por la autoridad territorial correspondiente sólo en los casos en que el bien inmueble tenga vigente gravamen por parte de la Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces, requerirá del concepto previo de esta entidad. En los demás casos, los Notarios y/o Registradores de Instrumentos Públicos no podrán exigir este requisito.

**Artículo 8°. Medidas tendientes a combatir la informalidad y precarización de la propiedad rural**. La conformación de propiedades común y proindiviso sin ningún tipo de control legal, ha conllevado a la conformación de asentamientos ilegales, invasión de tierras y la precarización de la propiedad rural.

Para tal efecto se establecen las siguientes medidas:

1. Para la venta de un terreno rural en común y proindiviso, el vendedor deberá acreditar mediante concepto y/o certificación expedido por la autoridad competente, que la porción de terreno que transfiere, cumple con la Unidad Agrícola Familiar – UAF y/o se encuentra en alguna de las excepciones contempladas en la Ley 160 de 1994.
2. Los Notarios se abstendrán de otorgar escritura pública de ventas común y proindiviso que no cumplan con el anterior requisito.
3. Los Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de inscribir en el registro público, escrituras públicas que no cumplan con el requisito anterior.

**Artículo 9°. Vigencia**. La presente ley rige a partir de su promulgación, deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables congresistas

**JAIME RODRÍGUEZ CONTRERAS**

Representante a la Cámara

Departamento del Meta

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**.

El presente proyecto de ley se pone a consideración del Honorable Congreso de la República para que en su faculta constitucional y legal considere la oportunidad y necesidad de regular el objeto del mismo, enriquezca desde la participación democrática la iniciativa y apruebe esta iniciativa. A continuación se enuncia los acápites que conforman esta exposición de motivos.

1. OBJETO
2. NECESIDAD O JUSTIFICACION
3. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
4. MARCO JURISPRUDENCIAL
5. IMPACTO FISCAL
6. CONFLICTO DE INTERESES
7. **OBJETO**

La presente iniciativa legislativa de origen parlamentario busca sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos de carácter rural, consolidados titulables o privados que se encuentran en el territorio nacional los cuales pueden ser objeto de formalización en los términos del Código Civil y demás normas concordantes.

1. **NECESIDAD O JUSTIFICACION**

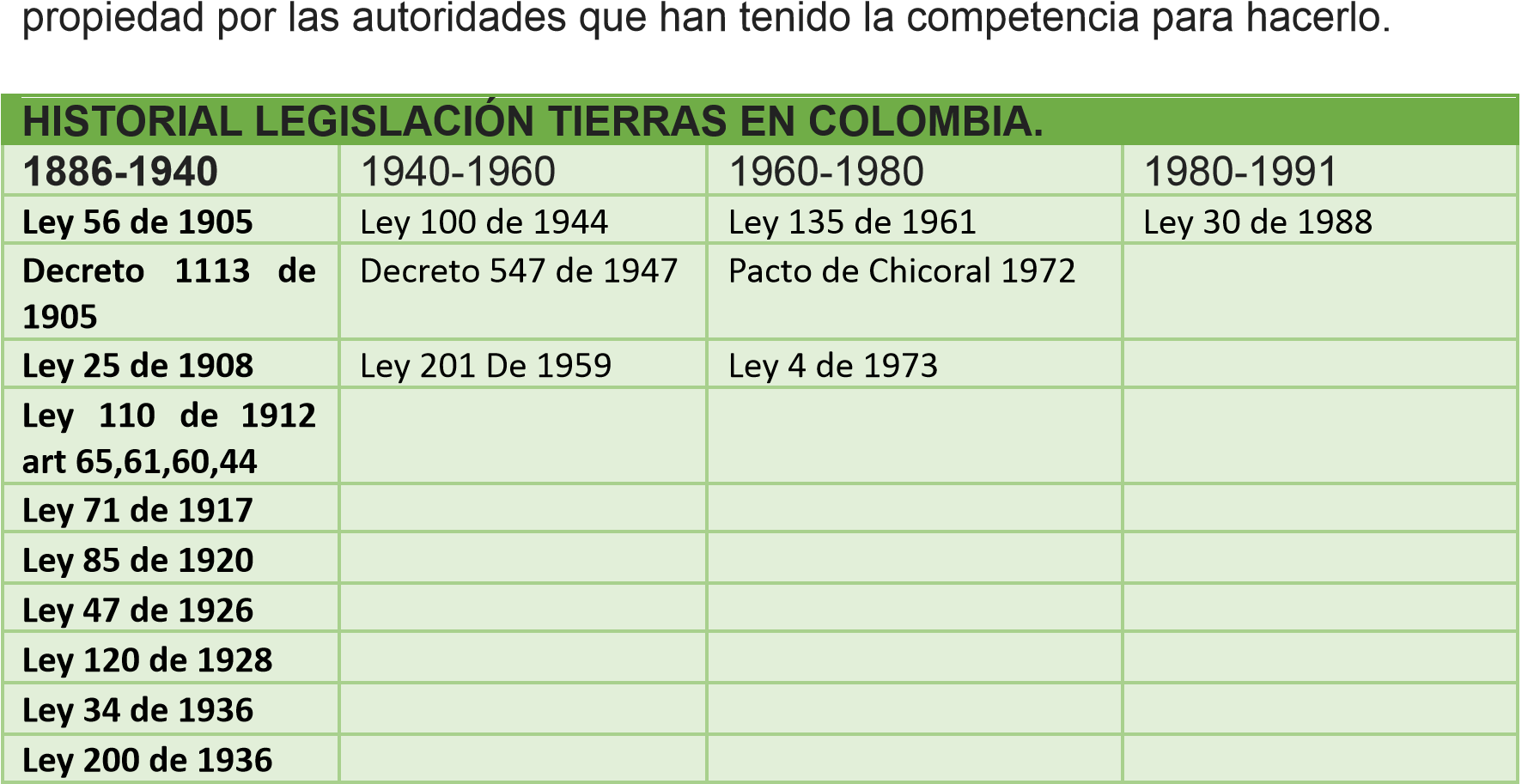
Con el presente proyecto de ley se desarrollaran beneficios para las personas naturales, entre estas consideramos las siguientes:

* Convertir a Colombia en un País de Propietarios.
* Promover el arraigo familiar en un territorio.
* Poder hacer inversiones con infraestructura de servicios públicos, educativos, recreativos y deportivos en estos asentamientos humanos en zonas rurales.

De la misma manera es relevante tener presente que se pueden desarrollar beneficios para las partes, para las personas privadas el beneficio del derecho a la propiedad y al Estado Colombiano en la medida que reconoce derechos contribuye al desarrollo del país y la seguridad económica de las familias así:

* Las comunidades que se encuentren en estos asentamientos humanos rurales ajustados a la normatividad vigente podrán serán titulares de los predios y mejoras que hayan construido a través del tiempo.
* El Estado Colombiano a través de sus entidades territoriales podrán recaudar los diferentes impuestos establecidos por ley.

Es importante tener presente que además de los anteriores es relevante la titularidad de estos predios con sus mejoras como política para garantizar la estabilidad de la población y el ejercicio de sus derechos, deberes políticos y el orden público tan necesarios en las familias para que puedan estabilizar su vivienda y su actividad productiva en estos centros poblados rurales más cercanos a toda la actividad agropecuaria, piscícola, pesquera o forestal como a sus granjas agropecuarias en momentos que en Colombia buscamos fortalecer la producción en las zonas rurales y avanzar en apoyar a esos 14 millones de colombianos trabajadores agrarios.

Lo anteriormente enunciado soporta el espíritu de este proyecto de ley, que busca legalizar y dar claridad a la propiedad de los asentamientos humanos rurales que se fundaron en el transcurso del tiempo y hasta la fecha se encuentran en el limbo jurídico y aunque han ocupado o están en posesión por familias en estos predios fiscales titulables pero que solo se les entregó los actos administrativos y por desconocimiento o falta de recursos de los poseedores de buena fe que hace años les entregaron esos predios en común y proindiviso y otros están posesionados de forma tranquila y pacífica a través de los tiempos en predios privados a la fecha no han podido normalizar o formalizar su derecho a la propiedad por las autoridades que han tenido la competencia para hacerlo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto 59 de**  **1938** |  |  |  |

Fuente: Trabajo de Grado-Monografía María Nayibe León Quitian.

La ley Zidres busca reactivar la economía en algunas áreas geográficas del territorio nacional que por sus condiciones especiales como elevados costos de producción de adaptación productiva, su lejanía de los centros urbanos y la baja densidad poblacional ha tenido poca inversión, en consecuencia buscó crear las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social como una estrategia institucional para fomentar la productividad en estos territorios.

I**II. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL**

El Congreso de Colombia tiene competencia para reglamentar la formalización de los bienes inmuebles rurales con base en el Art. 58 y armoniza con el art. 311 de la Constitución Política de Colombia.

***ARTICULO 58.*** *Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resulten en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.*

***ARTICULO 311.*** *Al municipio como entidad fundamental de la división político -administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.*

Como lo señalan los artículos constitucionales anteriormente citados, es deber del Estado garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos por los Colombianos que han cumplido con las normatividad vigente y en el caso que nos ocupa se busca sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos de carácter rural, consolidados y precarios en bienes fiscales titulables o privados que se encuentran en el territorio nacional y que hasta la fecha las entidades competentes no han cumplido la función de titular a los ocupantes o poseedores que se encuentran asentados en dichos territorios

El Art. 58 constitucional garantiza la propiedad privada y demás derechos adquiridos de acuerdo a las leyes, el Art 311 constitucional ordena a las entidades territoriales (Municipios) ordenar el desarrollo de su territorios entre otros; la Ley 160 de 1994 está inspirada en dar claridad al acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de la población campesina, promover y consolidar la paz a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social y el bienestar de la población campesina, prevenir la inequidad, concentración de la propiedad rural y dotar de tierra a hombre y mujeres campesinas que no la posean, generar empleo productivo en el campo y asegurar la coordinación y cooperación de las diversas entidades del estado, fomentar la adecuada de utilización social de las aguas, de las tierras rurales aptas para explotación silvoagropecuarias y de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas.

La ley 2044 de 2020 busca sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares.

**IV. MARCO JURISPRUDENCIAL**

La Sentencia C-165 de 2015 proferida por la Corte Constitucional se ha referido a la caracterización de los suelos rurales señalando que los terrenos no aptos para uso urbano por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales ya actividades análogas (Ley 388 de 1997-Art 33), el suelo rural hay entonces un área en que por razones de oportunidad y otra que es por un motivo distinto, a saber, por su destinación a usos agrícolas, ganaderos y forestales incompatible la ley consagra una sub categoría de zona rural por el suelo urbano en el cual hay una mezcla de usos: forma debida del campo y de la ciudad.

Puede haber desarrollo en suelos rurales suburbanos si bien con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios de conformidad con lo establecido en la ley 99 de 1993 y Ley 142 de 1994.

En virtud del Art 102 de la ley 388 de 1997 y el Art 2.2.6.6.1.4 del Decreto 1077 de 2015, expidió la circular 01 de 2018 ejerciendo plenamente la facultad de interpretación que le otorga la ley frente a su EOT, respecto de contradicciones de la normatividad urbanística dejando claro que los centros poblados rurales no pueden entenderse como suelo urbano dado que no se encuentran incluidos dentro de los perímetros urbanos de los municipios, motivación que nos impulsa a buscar la formalización de estas propiedades rurales o asentamientos en centros poblados rurales como pilar fundamental del desarrollo del País y parte estructural de la seguridad jurídica que reclama el estado de derecho en un país donde la economía primaria juega un papel importante como motor del desarrollo y como alternativa de paz en los territorios. Seguir concibiendo un grado de informalidad en la propiedad inmobiliaria razón por la cual estamos presentando esta iniciativa al congreso de Colombia para continuar desarrollando el artículo 58 y 64 de la Constitución política de Colombia que establece que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos colombianos.

No obstante lo anterior y el hecho que desde hace algunos años, los diferentes gobiernos y el congreso han venido desarrollando importantes esfuerzos para que Colombia se convierta en un “país de propietarios”, la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia sigue siendo de grandes dimensiones al punto que el gobierno nacional calcula a través de la UPRA que en el 2019 Colombia cuenta con un 52,7% de informalidad en la tenencia de la tierra. De los 1121 municipios sobre los cuales se calculó el índice 175 presentan entre el 75 Y el 100%, 497 municipios entre el 50 y el 75%, 351 entre el 25 y 50%, Y 79 entre el 0 y el 25%. de los predios rurales del país están en informalidad.

Dentro de la estrategias para regularizar o formalizar la tenencia de la tierra, cientos de predios en el país han sido adjudicados en común y proindiviso por instituciones como el INCORA, INCODER (Hoy ANT), siendo la principal característica de estas adjudicaciones que ninguno de los copropietarios tienen la plena titularidad del bien siendo todos dueños del predio de mayor extensión pero no de la cuota que le corresponde a cada uno o que se concrete en una parte del bien inmueble, sino en una cuota abstracta que ha traído muchos inconvenientes de tipo económico y personales y hasta de orden público.

El objetivo a desarrollar el precepto constitucional del Art 58 para garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en posesión u ocupación de los bienes fiscales titulables y/o privados en forma individual o asociativa en común y proindiviso con el fin de subsanar algunas situaciones anómalas facultando a las autoridades territoriales ( Alcaldes, Gobernadores) para que estas autoridades a través de actos administrativos puedan realizar la legalización o formalización de dichos predios.

En un principio se consideró factible importante, y beneficioso la adjudicación de estas grandes extensiones de tierra en común y proindiviso como una herramienta de asocio y trabajo comunitario, pero se ha convertido en un verdadero obstáculo para el aprovechamiento individual y colectivo de la tierra generando una nueva problemática asociada a la distribución física del territorio, la ausencia de títulos de propiedad entre los que se destacan los siguientes:

1. Algunos beneficiarios no fueron notificados de la adjudicación por el INCORA o el INCODER.

1. Algunas personas o familias nunca ocuparon ni explotaron las parcelas por desconocimiento de su adjudicación o problemas de orden público.

1. Algunos beneficiarios accedieron a la propiedad juntamente con su cónyuge o compañero permanente, pero posteriormente se separaron, retirándose uno del predio y continuando el otro en el mismo.

1. Algunos beneficiarios accedieron a la propiedad juntamente con su cónyuge o compañero permanente y éste, posteriormente, falleció.

1. Algunos beneficiarios se retiraron voluntariamente de la parcela, renunciando a su derecho mediante documento otorgado en Notaría.

1. Algunos beneficiarios tuvieron que abandonar la parcela por situaciones relacionadas con el conflicto armado interno.

1. Algunos adjudicatarios vendieron informalmente su parcela, en la mayoría de los casos debido a la falta de libertad de disposición del dominio por la afectación al régimen parcelario y como consecuencia de los engorrosos trámites que se debían realizar ante la misma entidad tituladora (INCORA – INCODER) para poder enajenar los predios.

Casos como los anteriormente citados se presentan en todo el País, situación que obliga al legislador que busque a través del aparato normativo entregarle facultades a los Alcaldes y Gobernadores como autoridades territoriales con el fin de titular aquellos predios o bienes inmuebles rurales donde se encuentran asentadas en centros poblados familias que no lograron adelantar ante las autoridades competentes de la época, en otrora INCORA, INCODER (hoy ANT) y que se hace necesario para organizar el territorio en cada uno de los municipios de Colombia y poder tener derechos a la propiedad real por parte de las familias que han venido ocupando los predios rurales en común y proindiviso, de acuerdo a la normatividad vigente en una forma pacífica y tranquila, como también la posibilidad de ampliar fuentes de recaudo e inversión por parte de los entes territoriales (municipios).

Para ilustración de los honorables congresistas citamos algunos ejemplos:

**PREDIO EL RODEO**

Municipio de Puerto López - Meta

28 cuotas partes

Este predio posee la matrícula inmobiliaria No. 234-14707, resultante del englobe de los predios El Nuevo Callao, Lote parte de El Rodeo y La Candelosa con matrículas inmobiliarias 234-1127, 234-7128 y 234-7636 respectivamente, y cuenta con una extensión de setecientas setenta y ocho hectáreas con dos mil quinientos cuarenta y cinco metros cuadrados (778,2545), y se encuentra ubicado en la vereda Puerto Guadalupe, municipio de Puerto López - Meta.

El predio fue asignado de forma definitiva al INCODER, por el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES de la Dirección Nacional de Estupefacientes

(DNE), por medio de la Resoluciones No. 0014 de 25/07/2005 y 0878 de

19 /08/2005, y entregado físicamente el 28 de agosto del mismo año.

Se adjudicó a veintiocho (28) familias con la Resolución 270 de 07/10/2005, y luego se revocó por un concepto de Procuraduría Agraria, con la Resolución 0936 de 29/11/2006, después de seleccionar en comité de desplazados a los nuevos comuneros, se profirieron resoluciones independientes en común y proindiviso de una veintiochoava (1/28) cuota parte para cada uno.

Según información levantada en visita a los predios se encuentra que la posesión de cada parcela o las características de ocupación para el año 2015, son las siguientes:

Veintiséis (26) familias viven en las parcelas con resolución de adjudicación, en común y proindiviso

Una fue vendida por la adjudicataria y se encuentra abandonada

Una se encuentra en arriendo

**PREDIO LOS CABALLEROS**

Municipio de Puerto López - Meta

47 cuotas partes

Este predio posee la matrícula inmobiliaria No. 234-3265, cuenta con una extensión de un mil trescientos diecisiete hectáreas con nueve mil quinientos cuarenta y cuatro metros cuadrados (1.317,9544), y se encuentra ubicado en la vereda Puerto Guadalupe, municipio de Puerto López - Meta.

El predio fue asignado de forma definitiva al INCODER, por el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por medio de la Resoluciones No. 0001 de 24/01/2006, y entregado físicamente el 7 de febrero del mismo año.

Se adjudicó a cuarenta y siete (47) familias con la Resolución 0231 de 04/04/2006 en común y proindiviso de una cuarenta y sieteava (1/47) cuota parte, y luego se revocó parcialmente por no presentarse en el predio a doce (12) familias con la Resolución 054 de 03/03/2008, después se realiza un sorteo el día 13/03/2008 con balotas y se reubica a trece (13) familias en este predio, a las cuales se les entrega resolución de adjudicación a tres beneficiarios y al resto, un oficio con mera expectativa de derecho sobre el predio de una cuarenta y sieteava (1/47) cuota parte. Se profirieron 23 resoluciones adjudicando individualmente la cuota parte del predio mayor en el año 2010.

Según información levantada en visita a los predios se encuentra que la posesión de cada parcela o las características de ocupación para el año 2015, son las siguientes:

Diecinueve (19) familias viven en las parcelas del predio, pero de ellos existen nueve ocupantes de hecho, ocho familias con mera expectativa (carta de INCODER sin resolución), las demás con resolución de adjudicación.

Las demás parcelas no presentan información relevante que concluyan si están siendo explotadas por los propietarios, toda vez que las personas que se encuentran en los mismos dicen ser encargados o administradores de los propietarios.

**PREDIO LAS LEONAS**

Municipio de Puerto López - Meta

135 Cuotas partes

Este predio posee la matrícula inmobiliaria No. 234-0000547, cuenta con una extensión de tres mil ochocientos hectáreas con seiscientos noventa y siete metros cuadrados (3.800,0697), y se encuentra ubicado en la vereda Puerto Guadalupe, municipio de Puerto López - Meta.

El predio fue asignado de forma definitiva al INCODER, por el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por medio de la Resoluciones No. 0014 de 25/07/2005, y entregado físicamente el 28 de agosto del mismo año. Se recibió el predio con familias como poseedoras de algunas parcelas

Se adjudicó a ciento treinta y seis (136) familias con la Resolución 0269 de 07/10/2005 en común y proindiviso de ciento treinta y seisava (1/136) cuota parte, y luego se revocó con la resolución 0938 de 29/11/2006 por recomendación de la Procuraduría Agraria, luego se emana la Resolución 0131 de 07/02/2007, por la cual se segrega un lote de terreno de doscientos (200) hectáreas, quedando el predio Las Leonas en tres mil seiscientos hectáreas con seiscientos noventa y siete metros cuadrados (3600,0697), posteriormente, se adjudica a ciento veintiséis (126) familias en común y proindiviso con resoluciones individuales con una ciento veintiseisava (1/126) cuota parte.

Según información levantada en visita a los predios se encuentra que la posesión de cada parcela o las características de ocupación para el año 2015, son las siguientes:

Noventa y nueve (99) familias viven en las parcelas del predio.

Once (11) tienen administrador o encargado

Cuatro son ocupantes de hecho

Existen dieciséis (16) parcelas abandonadas, las cuales fueron ocupadas por el adjudicatario en su momento.

Existen veinticinco familias o adjudicatarios que tienen resolución y no se les ha entregado parcela o cuerpo cierto a su derecho de propietario.

**PREDIO GUALAS, LA ILUSIÓN Y SAN JUAN**

Municipio de San Martín - Meta

367 cuotas partes

Estos predios poseen las matrículas inmobiliarias Nos. 234-18656, 236-8655 y 236-8654 respectivamente y cuenta con una extensión total de 2492. 5462 Hectáreas y se encuentra ubicado en el Municipio de San Martín de los Llanos.

Estos predios fueron extinguidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes al extinto Narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y asignados definitivamente por la DNE al INCODER (FNA) mediante Resoluciones 021 del 03/12/2004 (predios San Juan y la Ilusión) y la 015 del 15 de junio de 2007 (predio Gualas).

Una vez la transferencia de los predios se encuentra en firme, se inicia el proceso de adjudicación de los predios desde finales de 2007, hasta mediados del 2008, bajo la figura jurídica de subsidio integral de tierras en 1/367 parte en común y proindiviso a personas comprendidas por tres grupos de población a saber Reincorporados; Desplazados y Campesinos. Al final se adjudican 270 cuotas partes adjudicadas a familias como subsidio integral en común y proindiviso e inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria y 97 cuotas partes en cabeza del INCODER (de las cuales 18 no pueden disponerse por existir resolución de adjudicación notificada pero no inscrita y 79 de libre disposición).

Aunque el predio se encuentra dividido en Trescientas Sesenta y siete (367) partes, de conformidad con las resoluciones de adjudicación, pero de conformidad con las actas de entrega material fallida hasta tanto no fuera culminado el proceso de notificación de las Resoluciones de Adjudicación del predio de 19 de octubre de 2008, sólo quedan 319 familias, 161 son familias de reinsertados a la vida civil, 72 son familias desplazadas, 86 son familias campesinas, 270 familias cuentan con resolución inscrita en el FMI (de las cuales solo 124 ocupan y explotan el predio y 146 no explotan directamente el predio ni lo ocupan.

18 familias con resolución notificada no inscritas en el FMI.

4 familias ocupantes de hecho sin resolución ni acta de entrega.

Desde un principio la población desplazada ha manifestado su inconformidad con la asignación realizada, en mayor proporción para los reincorporados, debido a que estos son tildados de ser sus victimarios y ahora deben convivir con ellos en común y proindiviso por lo que le adjudican al INCODER el no muy noble título de “revictimizador”.

**V. IMPACTO FISCAL**

La ley 819 en su artículo  7º ordena: Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo…..

En consecuencia, el presente proyecto no genera impacto fiscal a las finanzas del Gobierno Nacional dado que lo que busca la iniciativa es que los bienes inmuebles no necesarios para sus funciones legales y constitucionales puedan ser donados a las entidades territoriales lo que redundaría en beneficio en el no pago por parte de las entidades territoriales de dichos impuestos de estos bienes fiscales a las entidades territoriales (municipios) y contrario sensu las entidades territoriales una vez adjudiquen los predios rurales donde se encuentren las viviendas en los centros poblados podrán recaudar el impuesto predial para fortalecer las arcas territoriales.

1. **CONFLICTO DE INTERÉS**

El artículo 183 de la Constitución Política consagra a los conflictos de interés como causal de pérdida de investidura. Igualmente, el artículo 286 de la Ley 5 de 1992 establece el régimen de conflicto de interés de los congresistas.

De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para que se configure el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben presentarse las siguientes condiciones o supuestos:

1. Que exista un interés directo, particular y actual: moral o económico.
2. Que el congresista no manifieste su impedimento a pesar de que exista un interés directo en la decisión que se ha de tomar.
3. Que el congresista no haya sido separado del asunto mediante recusación.
4. Que el congresista haya participado en los debates y/o haya votado.
5. Que la participación del congresista se haya producido en relación con el trámite de leyes o de cualquier otro asunto sometido a su conocimiento.

En cuanto al concepto del interés del congresista que puede entrar en conflicto con el interés público, la Sala ha explicado que el mismo debe ser entendido como “una razón subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen” y como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto” ( Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de junio de 2017).

De acuerdo a la Sentencia SU-379 de 2017, no basta con la acreditación del factor objetivo del conflicto de intereses, esto es, que haya una relación de consanguinidad entre el congresista y el pariente que pueda percibir un eventual beneficio. Deben ser dotadas de contenido de acuerdo a las circunstancias específicas del caso concreto.

La Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 17 de octubre de 2000 afirmó lo siguiente frente a la pérdida de investidura de los Congresistas por violar el régimen de conflicto de intereses:

“El interés consiste en el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto. Así, no se encuentra en situación de conflicto de intereses el congresista que apoye o patrocine el proyecto que, de alguna manera, redundaría en su perjuicio o haría más gravosa su situación o la de los suyos, o se oponga al proyecto que de algún modo les fuera provechoso. En ese sentido restringido ha de entenderse el artículo 286 de la ley 5.ª de 1991, pues nadie tendría interés en su propio perjuicio, y de lo que trata es de preservar la rectitud de la conducta de los congresistas, que deben actuar siempre consultando la justicia y el bien común, como manda el artículo 133 de la Constitución. Por eso, se repite, la situación de conflicto resulta de la conducta del congresista en cada caso, atendidas la materia de que se trate y las circunstancias del congresista y los suyos (…) “

Teniendo en cuenta lo anterior, con relación al presente proyecto de ley, no es posible delimitar de forma exhaustiva los posibles casos de conflictos de interés que se pueden presentar con relación al establecimiento de medidas tendientes a la consolidación de los sistemas de trazabilidad e identificación animal como un instrumento para la lucha contra la deforestación., sin perjuicio de que se deban acreditar los mencionados requisitos de la jurisprudencia, para cada caso concreto.

En el presente Proyecto de Ley se pueden llegar a presentar Conflictos de Interés cuando los congresistas, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, tenga relaciones, comerciales, accionarias o económicas, en general, con sociedades en cuyo objeto social se incluya el desarrollo de actividades relacionadas con la ganadería.

Se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la ley 5 de 1992 modificado por la ley 2003 de 2019, no exime al

Congresista de identificar causales adicionales.

De los honorables congresistas.

**JAIME RODRÍGUEZ CONTRERAS**

Representante a la Cámara

Departamento del Meta